

LAS PENSIONES SOVI: PROBLEMAS JURIDICOS ACTUALES

Sumario: 1. Introducción. 2. Requisitos comunes. 3. Las prestaciones del Sovi. 4. El Sovi y el subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 45 años. 5. A modo de conclusión.

Por J. M. López Gómez*

1. INTRODUCCION

1.1. El marco normativo

Pretendemos con este estudio el análisis del régimen jurídico de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (1) (sistema de previsión social vigente desde el 1 de septiembre de 1939 hasta su sustitución por el actual sistema el 1 de enero de 1967) no desde una perspectiva histórica sino actual. En efecto, a pesar de que desde el 1-1-67 con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social, el SOVI fue "extinguido", hoy siguen planteándose un gran cúmulo de problemas derivados de aquel antiguo sistema de previsión social llegando algunas de sus normas a ser analizadas por el Tribunal Constitucional (2).

Desde esta perspectiva debemos partir del precepto clave que en este aspecto viene constituido por la Disposición Transitoria 2.2 de la LGSS, que dice:

"Quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en esa fecha, tuviesen cubierto el periodo de cotización exigido por el extinguido Seguro de Vejez e Invalidez o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al extinguido régimen de Retiro Obrero, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero de dichos seguros con arreglo a las condiciones exigidas por la Legislación del mismo, y siempre que los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social..."

La Legislación a que hace referencia esa D.T. está constituida fundamentalmente por las siguientes normas:

* Abogado. Colaborador del Departamento de Derecho del Trabajo. Universidad de Sevilla.

A.-La Ley de 1 de septiembre de 1939 que sustituyó el régimen de capitalización en el Retiro Obrero por una pensión —dicha norma utiliza el término “subsidio”, art. 1 y 3— de vejez, fijada en tres pesetas diarias.

B.-La Orden de 2 de febrero de 1940 que desarrolló la anterior.

C.-La Orden de 20 de enero de 1941 que modificó algún aspecto de la Disposición precedente.

D.-El Decreto de 8 de abril de 1947 por el que se crea el régimen unificado del SOVI e introduce, por primera vez en nuestra historia, la protección de la Invalidez derivada de contingencias no profesionales.

E.-La Orden de 18 de abril de 1947 que desarrolla el Decreto citado anteriormente.

F.-El Decreto-Ley de 2 de septiembre de 1955 por el que, junto con otros aspectos, crea una “prestación a favor de las viudas de los trabajadores beneficiarios del expresado seguro”.

G.-La Orden de 10 de agosto de 1957 que derogó el art. 8 de la de 2 de febrero de 1940 respecto al régimen de incompatibilidades de las pensiones SOVI.

H.-La Ley de 26 de diciembre de 1958 que extiende el campo de aplicación del SOVI al personal no funcionario de las distintas Administraciones Públicas.

I.-La Ley de 10 de febrero de 1943, el Decreto de 26 de mayo de 1943 y la Orden de 17 de diciembre de 1947 que regula el SOVI en el sector agrícola.

Por otra parte, ya en desarrollo de la D.T. 2.2 de la LGSS, habrá que tener en consideración las siguientes Disposiciones:

— El Decreto 1.564/67 de 6 de julio, por el que se regulan las “situaciones derivadas del extinguido Seguro de Vejez e Invalidez”.

— La Circular 66/82 de 28 de junio, que aclara la citada DT. fundamentalmente respecto al régimen de incompatibilidades.

— La Resolución de 30 de julio de 1985 que declarara imprescriptible la pensión de viudedad del SOVI en determinadas circunstancias.

Habrà igualmente que tener en cuenta los sucesivos Decretos sobre revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de otras prestaciones de protección social pública a los efectos de conocer la cuantía de las pensiones SOVI y sus mejoras.

1.2. Características generales

El SOVI, a pesar de lo que su denominación pudiera dar a entender, extiende su cobertura no sólo a las prestaciones de vejez e invalidez sino que también, como hemos visto desde el Decreto-Ley de 2-9-55, ampara a la

viudedad; no extiende su cobertura, sin embargo, a otras situaciones derivadas de la muerte como la orfandad y en favor de familiares (S.TCT de 14-12-85. RA 6975; 28-5-88, RA 4124; 9-687, RA 12688; entre otras (3)).

El SOVI sigue un modelo mixto más acusadamente asistencial que contributivo aunque con algunas notas propias de éste:

1. En cuanto al campo de aplicación el SOVI sólo cubría a los trabajadores por cuenta ajena (art. 1 de la Orden 2-2-40), aunque se extendió a los trabajadores autónomos de la rama agropecuaria y pescadores, según se desprende de los artículos 1 y 8 del Decreto Ley de 2-9-55.

No es, sin embargo, aplicable este régimen— decía el art. 2 de la Orden 2-2-40— a los funcionarios y obreros del Estado, provincia o municipio “que tengan derecho a jubilación”, pues estos solían tener sistemas propios de clases pasivas y, por ello, la Orden de 31-12-41 excluía de los beneficios del régimen del SOVI a “los funcionarios de la Diputaciones y Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que tengan previstas prestaciones iguales o superiores a las del Seguro de Vejez”. A los que no estuvieran en esas situaciones, en sentido contrario, debe entenderse que si les era aplicable este régimen que de forma definitiva, les fue extendido por la Ley de 26 de diciembre de 1958. En efecto, la citada Ley incluso equiparó a la cotización, a los efectos de tener derecho a las pensiones del SOVI, el acreditar haber realizado labores para Entidades Públicas durante cinco años (en este sentido lo ha entendido el TCT S. 30-11-83, RA 10221; 3-4-87, RA 7331; 29-11-87, RA 26566 y otras muchas).

No es, sin embargo, aplicable el régimen del SOVI a los “servidores domésticos” (art. de la Orden de 2-2-40).

Debe advertirse, como indica Alvarez de la Rosa, que el SOVI, el SOE y régimen de subsidios familiares, con los que coexistía fueron coordinados, sin perder la independencia de sus Cajas especiales, fundamentalmente en los que se refiere a las materias de campo de aplicación, afiliación y cotización por el Decreto de 29-12-48 (4).

2. Para tener derecho a las prestaciones derivadas del SOVI se exige tener cubierto un periodo de cotización de 1.800 días en dicho régimen (art. 7.2.b de la Orden 2-2-40, art. 8.2 del Decreto de 18 de abril de 1947 y art. 2.2 de la Orden de la misma fecha respecto a la pensión de invalidez) si bien, la mera afiliación al régimen de Retiro Obrero se considera como equivalente a la cotización (DT. 2.2 de la LGSS).

Por el contrario, el carácter meramente asistencial del sistema SOVI se pone de manifiesto fundamentalmente en tres notas:

1. Por la cuantía de las pensiones del SOVI, que no se hace depender ni del periodo previo de cotización ni del montante de las cuotas satisfechas. Su

cuantía es, pues, uniforme evolucionando en el tiempo desde 3 ptas/diarias en sus orígenes hasta 28.560 ptas/mes (para las pensiones de vejez e invalidez) y 26.290 ptas/mensuales para las pensiones de viudedad) conforme al Real Decreto de 6-7-90. Cabe señalar al respecto que este Real Decreto suprime las diferencias que existían con anterioridad entre las pensiones de viudedad por razón de la edad -más o menos de 65 años- y que en su preámbulo se prevé la igualación de cuantía de las pensiones de viudedad con las de vejez e invalidez. Las cuantías a que se ha hecho referencia comprende tanto la cuantía básica como las mejoras que periódicamente experimentó aquélla.

Desaparece, pues, una de las características propias de las pensiones contributivas cual es el de la proporcionalidad entre la cotización y la cuantía de la prestación con la finalidad de garantizar a los trabajadores el mantenimiento de ingresos proporcionales a los obtenidos durante su vida activa.

2. Por la exigencia, con carácter general, de que el beneficiario carezca de otros recursos para su subsistencia, como veremos posteriormente al tratar el tema de las incompatibilidades. Con ello más que garantizar ingresos proporcionales a los obtenidos como trabajador se trata de intentar remediar situaciones de extrema necesidad, hasta el punto de que en el caso de la pensión de viudedad se exigirá que el beneficiario carezca de rentas y tenga cumplidos 65 años o se encuentre en situación de invalidez.

3. Por lo que se ha llamado, reiteradamente por la jurisprudencia, el carácter "residual y subsidiario" de las pensiones del SOVI (S. del TCT de 10-1-85 Colex n 55, 7-11-88 Colex n 1.688, 14-3-89 Colex n 318, entre otras muchas (5)), con lo que se afirma rotundamente su incompatibilidad con las demás pensiones de los regímenes que integran la Seguridad Social o de "los llamados a integrarse" o para, en caso de concurrencia con otras pensiones públicas compatibles, impedir su revalorización. De esta forma el TCT llega a afirmar que, como las pensiones SOVI son residuales y para aquellos trabajadores que carezcan de otra protección, su cuantía básica, que en caso de vejez es de 1.000 ptas mensuales, no puede mejorarse cuando concorra con otra pensión sea o no del sistema de la Seguridad Social... (TCT 28-5-84 Colex n 806; 7-11-88 Colex n 1.688; 28-4-88 Colex n 520) o que la condición de pensionistas en alguno de los regímenes integrantes del sistema de la Seguridad Social impide adquirir el derecho a cualquiera de las prestaciones del viejo régimen obligatorio, dada su "naturaleza residual y subsidiaria" (TCT 10-1-85 Colex n 55; 3-4-89 Colex n 476; 22-2-86 Colex n 421).

Contrasta, sin embargo, este carácter asistencial, residual, subsidiario, secundario o, en definitiva, esta configuración del SOVI como último asidero al que agarrarse de quien no tiene más medios de vida (al menos definitivamente mientras no se promulgue la Ley que establezca las pensiones no contributivas y ante la insuficiencia de las actuales prestaciones asistenciales), con la rigurosidad con la que, se exigen los requisitos para causarla.

1.3. El carácter residual y subsidiario del SOVI y las pensiones no contributivas

Afirmado el carácter "residual y subsidiario" de las pensiones del SOVI se plantea el problema de su relación con las prestaciones no contributivas cuando se promulga la Ley por la que se establece en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, de resultar aprobado el actual proyecto de Ley. En efecto, vimos como la DT. 2.2 de la LGSS supeditaba el derecho a las pensiones del SOVI a que "los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social", ello hace surgir la cuestión de que si las pensiones del SOVI tendrán también respecto de las prestaciones no contributivas carácter subsidiario y residual, esto es, si tener derecho a las prestaciones no contributivas elimina la posibilidad de obtener las del SOVI.

Una interpretación literal de la DT. 2.2 LGSS nos llevaría desde luego a esta solución pues las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez se configuran en el proyecto de Ley que las establece como "pensiones" (art. 2 del mismo y arts. 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis y 155 bis de la LGSS en la redacción propuesta por el mismo). Si esta interpretación fuera la que prosperara se estaría condenando al SOVI a su "extinción" definitiva, pues las situaciones protegidas por unas y otras en lo sustancial coinciden y parece difícil que hubiera casos no protegidos por el nivel no contributivo de las prestaciones del sistema de Seguridad Social que pudieran acceder a las pensiones del SOVI.

Tal interpretación no debe, sin embargo, prosperar atendiendo a la finalidad del citado proyecto de Ley cual es la de introducir la modalidad de prestaciones asistenciales con carácter subsidiario y complementario de las contributivas, según su exposición de motivos. Lo que ocurre es que se produce una disfuncionalidad porque ni la DT. 2.2 de la LGSS podía prever el que se estableciera el nivel no contributivo ni el nuevo proyecto de Ley ha recordado tal Disposición Transitoria. De esta forma se podría entender que las pensiones contributivas tendrían carácter subsidiario respecto a las contributivas del SOVI, ya que este también resulta integrado por absorción en el sistema de Seguridad Social.

En todo caso el dato fundamental nos lo puede suministrar el de la cuantía que se establezca para cada tipo de pensión pues parecería absurdo que se obligara al posible beneficiario a optar por la de menor cuantía cerrándole el paso a la mayor, pues, como veremos, ambas resultan incompatibles.

En tal supuesto, conforme al principio "pro operario", se impondría el conceder al beneficiario un derecho de opción por la que le resulte más favorable, que por pura lógica serían las de SOVI, pues no parece normal el caso contrario de que el nivel asistencial de protección fuera mayor que el contributivo, aunque esta nota este ciertamente bastante debilitada en el régi-

men del SOVI. De todas formas no se puede descartar la hipótesis de que en un futuro la cuantía de ambos tipos de pensiones se equiparen o, incluso, se produzca la absorción de las del SOVI por las no contributivas, lo que apartaría aquella en el baúl de los recuerdos históricos.

1.4. SOVI, realidad social y Constitución

A los ojos de un observador de hoy el sistema de previsión social SOVI aparece claramente insuficiente pues aquella legislación estableció un sistema, al menos visto desde la actualidad pero ya también entonces, muy restrictivo. Peor cuando se trata, aún residualmente, de aplicarlo hoy no puede primar la literalidad de aquellos preceptos -tesis por la que se inclina mayoritariamente el TCT como iremos viendo- sobre la realidad social en que han de ser aplicados y del contexto del conjunto del ordenamiento jurídico. No pueden interpretarse al margen fundamentalmente de la Constitución. No pueden hacerse prevalecer distinciones, en aquel entonces posiblemente razonables pero hoy totalmente injustificadas, para negar el derecho a pensión a quien se ve en situación de necesidad vital al ocurrir una contingencia digna de protección.

El principio del Estado social y democrático de derecho que proclama el art. 1 de la Constitución, informa un conjunto de disposiciones, como el mandato del art. 9.2, que prescribe a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas" y "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud" y el conjunto de los principios rectores de la política social y económica de capítulo III del Título I, cuyo "reconocimiento, respeto y protección" informarán "la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos" (art. 53.3 CE.), impide considerar a tales principios como normas sin contenido y obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes (S. T.Co. 19/82 de 5 de mayo, F.J. 6).

Entre esos principios cabe resaltar los contenidos en el art. 41 ("los poderes públicos fomentaran un régimen público para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad..."), en el art. 50 ("los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad) y en el 49 (que igualmente exige la protección de los minusválidos).

Aplicar los preceptos de la antigua legislación del SOVI a la realidad social actual (art. 3.1 del Código Civil) significa fundamentalmente interpretarlos conforme a la Constitución, eligiendo entre sus posibles sentidos aquel que resulte más conforme con los principios que proclaman las normas cons-

titucionales (S. T.Co. 19/82 de 5 de mayo, F.J. 7; S. T.Co. 253/88 de 20 de Diciembre, F.J. 4; S. T.Co. 209/87 de 22 de diciembre F.J. 4, entre otras).

Con ese espíritu de flexibilidad, teniendo en cuenta el carácter dinámico del sistema de previsión social y tratando de dar con la interpretación más favorable a los principios constitucionales, afrontamos el estudio de los requisitos para obtener el derecho a las pensiones del SOVI.

2. REQUISITOS COMUNES

Para tener derecho a las pensiones del SOVI, junto con unos requisitos específicos para cada prestación, es preciso que concurren una serie de circunstancias como requisitos comunes a los tres tipos de prestaciones que se contemplan en citado régimen.

2.1. Período de Carencia

Como hemos visto la D.T. 2.2 de la LGSS establece que los que tuvieron cubierto el periodo de cotización exigido por el extinguido Seguro de Vejez e Invalidez o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al régimen del Retiro Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero de ellos con arreglo a las condiciones exigidas por la Legislación del mismo.

Se trata de un requisito de carácter alternativo, la concurrencia de cualquiera de las dos circunstancias implica la obtención de esta primera premisa: la mera inscripción en el Retiro Obrero -que protegía a la vejez desde el Real Decreto de 11 de marzo de 1919-, equivale pues a la obtención del requisito del periodo de carencia (S. TCT de 25-2-82 Colex n 551, 20-6-86 Colex n 1038, 17-6-88 Colex n 849, y otras muchas).

El periodo exigido por la Legislación del SOVI era de 1.800 cotizaciones, así:

Respecto a la pensión de vejez el art. 7.2 de la Orden 2-2-40 además del requisito de la edad, exigía que el causante se encontrara en uno de los siguientes casos:

"A) Haber sido afiliado antes del 1 de septiembre de 1939" en clara alusión al Retiro Obrero, que en esa fecha se sustituyó por el "Retiro de Vejez" (art. 1 de la Ley de 1-9-1939).

"B) Que con anterioridad a la petición del subsidio se haya satisfecho en su favor las cuotas correspondientes al periodo de carencia, que será de 600 días en 1.940 y aumentará en 300 días al comienzo de cada uno de los años sucesivos hasta 1.944, a partir de cuya fecha será de 1.800 días.

Respecto a la pensión de invalidez igualmente se exige que "tenga reconocidas en su favor 1.800 cotizaciones" (art. 8.2 del Decreto de 18 de abril de 1947), además de que "la afiliación al régimen general de subsidios de vejez esté realizada, al menos con 5 años de antelación a la fecha en que sea declarada la invalidez..." (art. 2.2 de la Orden de 18-4-47).

Por último, la viudedad se concedía a "las viudas de los trabajadores beneficiarios del expresado seguro o de aquellos que hubieren tenido derecho a él..." (art. 3 del Decreto-Ley 2-9-55), lo que obviamente supone que el causante tuviera efectuada la cotización señalada o la afiliación al Régimen Obrero.

El examen de este requisito, que en principio puede parecer simple, ha dado lugar a abundante litigiosidad. Nos referimos a los problemas fundamentales que se plantean.

2.1.1. El principio de compensación de culpas

El primer problema que tratamos trae su raíz en el hecho de que la Legislación del SOVI no estableció norma alguna que previera que el incumplimiento de la obligación de afiliación o cotización, aún demostrada la realidad de la prestación de servicios que impusieran tal obligación, supusiera responsabilidad alguna, ni directa, ni subsidiariamente para la entidad de Previsión Social encargada de su gestión, ni tan siquiera para el propio empresario obligado directamente a ello. Por eso el TCT, no considera que sea de aplicación a las pensiones SOVI ni el principio de automaticidad, "en virtud del cual el obrero se encuentra protegido aún en el caso de que su patrono haya incumplido la obligación aseguradora" (6), ni el de responsabilidad subsidiaria de la Seguridad Social respecto de las obligaciones de los empresarios que hubiesen incumplido sus obligaciones de afiliación, alta o cotización. Todo lo contrario, entendiendo el TCT, que sólo tras la publicación del Decreto de 4-6-59 se hizo posible una exigencia de responsabilidad en los supuestos de "incumplimiento imputable a la empresa o Entidades de la obligación de afiliar a sus trabajadores", en cuyo caso, "correrán a cargo de las mismas las prestaciones que pudieran corresponder a los productores no afiliados en tiempo y forma...", durante el periodo de vigencia del SOVI era aplicable el principio de compensación de culpas, según el cual si bien la filiación era una obligación patronal (art. 3 de la Orden 6-10-39 y 3 de la Orden 2-2-40) también el trabajador podía instar su afiliación, con carácter subsidiario (S. TCT 27-3-82 Colex n 555, 4-2-85 Colex n 243, 10-6-88 Colex n 848 (7)).

Conforme a esta doctrina jurisprudencial el hecho de acreditar haber trabajado por cuenta ajena es irrelevante para causar pensión SOVI sino fue inscrito en el Retiro Obrero o filiado y cubierto el periodo de carencia en el

SOVI, pues, dice con insistencias el TCT, que no son aplicables los arts. 96 de la LGSS ni el 95 de la LSS, ni, en definitiva los preceptos que establecen los principios de automaticidad de las prestaciones o de responsabilidad del empresario o del INSS, sino que se rigen por su Legislación específica que no contiene norma alguna que exija tales responsabilidades (S. TCT 26-11-82 Colex n 1890, 8-7-83 Colex n 1060...). Otra cosa, continúa argumentando el TCT, supondría dotar a aquellos preceptos de una retroactividad de la que carecen conforme a lo dispuesto en el art. 2.3 del Código Civil (S. TCT de 18-6-84 Colex n1091).

El principio de compensación de culpa, en definitiva, viene a significar incluso la exoneración de responsabilidad de la empresa por la no afiliación (S. TCT 3-6-86 Colex n 1175) y la consiguiente pérdida del derecho a pensión del trabajador que no solicitó su afiliación o cotización.

Esta doctrina debe ser contemplada críticamente, no parece posible entender en aquellos tiempos de postguerra, en una situación donde los derechos de los trabajadores prácticamente eran mínimos fuera a éstos posible exigir, contra la voluntad de su empresario, su afiliación. No les era materialmente posible forzar ese derecho. Si ya de por su se presenta difícil probar el hecho de haber trabajado, más dificultades aún presenta el hecho de acreditar su afiliación.

Por otra parte, no se puede olvidar que mientras que el art. 3 de la Orden de 6-10-39 establecía una obligación de afiliación para los empresarios ("la afiliación deberá ser hecha por los patronos"), los trabajadores sólo tenían una facultad ("y en su defecto, podrán ser solicitada por los obreros"), y el incumplimiento de tal obligación por parte del empresario debe traer consigo todas las responsabilidades que den lugar en Derecho, pues "queda sujetos a la indemnización por daños y perjuicios causados a los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas" (art. 1101 de Código Civil). No puede pues eximirse de responsabilidad a quien incumpliendo sus obligaciones causa el daño de privar de una pensión a otro y el Código civil si estaba vigente en esa época.

Por otra parte, si por un lógico y básico principio de justicia social se establece la responsabilidad directa o subsidiaria de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social en caso de incumplimiento de las obligaciones de afiliación y cotización (art. 95 Lss y 96 LGSS), extenderlo a las prestaciones derivadas del SOVI no supone dotarlos de retroactividad prohibida, pues esa responsabilidad se predicaría respecto de las prestaciones causadas con posterioridad a las normas que las imponen. En cierta forma, los poderes públicos son corresponsables, por el mal funcionamiento de los servicios públicos de inspección, del incumplimiento de las obligaciones de afiliación y cotización -art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico del Estado de 1957, art. 121.1 de la Ley de Expropiación Forzosa 16-12-1954 vigente ya en aquellos tiempos y

106.2 de la Constitución— y este principio de responsabilidad del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, es, junto con otros, la madre de los de automaticidad de las prestaciones y de responsabilidad subsidiaria de la Seguridad Social respecto de las obligaciones de los empresarios. Una rigurosa aplicación del principio de responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de los servicios públicos de inspección nos podría llevar en definitiva a corresponsabilizar a éste del incumplimiento de la obligación empresarial respecto de la Seguridad Social ya con la legislación entonces vigente.

Pero fundamentalmente entiendo que la postura del TCT no puede compartirse porque no tiene en cuenta el “carácter esencialmente dinámico de la Seguridad Social” (S. TCT 19/82 de 5 de mayo), a cuyo sistema, por vía de integración pertenece el SOVI, porque petrifica al SOVI al margen de la evolución de la previsión social, de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico condenando a un gran colectivo de trabajadores a la marginación del progreso social, como sí para ellos éste no existiera. No se puede hacer prevalecer tan importante diferencia por la simple razón de que nacieron, vivieron y trabajaron en otro tiempo, por cierto bastante difícil, en el que la Previsión Social estaba todavía en pañales.

No entiendo, en definitiva, compatible dicha doctrina con los principios del Estado Social y de Derecho proclamado por nuestra Constitución y con la obligación de los poderes públicos de garantizar la asistencia y las prestaciones ante situaciones de necesidad (art. 41 CE), de proteger la vejez (art. 50)... Dado el carácter residual y casi asistencial de las pensiones SOVI no me parece justo ni equitativo regatear de esta forma ese aún hoy último asidero de quien se encuentra en situación de necesidad sin más recursos. Al fin y al cabo los principios de automaticidad y responsabilidad subsidiaria del INSS no son más que consecuencias de un elemental principio de justicia social. De “lege ferenda” pues sería necesario la extensión del principio de automaticidad a las prestaciones del SOVI, como ya han apuntado Alarcón y González Ortega respecto a todas las prestaciones del sistema de Seguridad Social (8), en este caso, incluso por la gravedad de sus consecuencias con mayor razón.

2.1.2. Excepciones al principio de compensación de culpa

La anterior doctrina no es, sin embargo, aplicable al personal no funcionario al servicio del Estado, Corporaciones Locales y Organismos Autónomos, pues la Ley 26-1-58 en su art. 1.2 establecía que “el personal afectado por la presente Ley tendrá derecho a las prestaciones de los Seguros Sociales y Mutualismo Laboral, desde el día siguiente a su entrada en vigor, quedando exceptuados del periodo de carencia reglamentario, excepto en el de vejez para el que serán preciso cinco años de antigüedad al servicio de las entidades públicas”.

En este sentido el TCT (S. 20-7-82 Colex n 1255, 30-11-83 Colex n 1491, 3-4-87 Colex 771...) exime a ese personal de acreditar el periodo de carencia bastando para reconocerles el derecho a las pensiones SOVI el que acreditaran una permanencia al servicio de entidades públicas superior a cinco años.

Se detecta, en este sentido, una quiebra del principio de igualdad establecido en el art. 14 CE, entendiendo que la desigualdad producida no es razonable, ni justificada, ni proporcional, pues, aunque alguna diferencia pueda existir entre estos colectivos y los de las empresas privadas, el factor de diferenciación carece de relevancia para deducir tan importante y vital desigualdad. En realidad la obligación de afiliar al SOVI a estos trabajadores era exigible desde la instauración del Seguro de Vejez, como vimos.

La asunción por parte del Estado del pago de estas pensiones obedece, y desde luego es lógica, a la asimilación de su propia responsabilidad por el incumplimiento -en este caso directo- de sus obligaciones de afiliación y de cotización, lo que no es lógico es que se exima a los empresarios de idéntica responsabilidad, ni que el propio Estado no asuma la responsabilidad indirecta en la medida en que resulta incumplida su obligación de fiscalizar y hacer cumplir la Ley.

2.1.3. La incomputabilidad de la afiliación/cotización al SOE y Montepíos a los efectos de causar pensiones del SOVI

Con el SOVI coexistían, por una parte, el Seguro Obligatorio de Enfermedad -creado por la Ley de 14-12-42 que extendía su proyección “a todos los productores económicamente débiles” respecto de la asistencia sanitaria y económica por enfermedad- y, por otra, con los Montepíos, Mutualidades o cajas de Empresas, de Asociaciones o de Agrupaciones -reguladas por, entre otras normas, el Real Decreto de 24 de julio de 1921 que las consideraba como Entidades aseguradoras de la gestión complementaria de carácter social y posteriormente por la Ley de Montepíos y Mutualidades de Previsión Social de 6 de Diciembre de 1941-. Pues bien, el TCT ha venido considerando que la afiliación al SOE o a las mutualidades citadas no equivale a los efectos de la DT. 2.2 LGSS a la afiliación al Retiro Obrero o a la cotización al SOVI. En este sentido puede citarse respecto al SOE las sentencias del TCT de 31-1-84 RA 750 y 14-10-85 RA 5546..., respecto al Montepío Marítimo Nacional las de 15-7-85 Colex n 1.301, 17-5-87 Colex n 10489 y 20-5-88 Colex n 850..., en relación con el Montepío del Servicio Doméstico las de 18-6-83 RA 5796, 24-4-84 RA 3781 y 9-9-86 RA 7511... y la de 19-5-87 RA 10492 respecto del Montepío de empleados de Banca.

La negativa a considerar la afiliación al SOE como equivalente a la del SOVI la fundamenta el TCT en el hecho de que aquel es un seguro de

carácter parcial y único de naturaleza y contenido sanitario, bien diferente al SOVI y no homologable con éste.

La exclusión de los períodos cotizados a las Mutualidades y Montepíos se argumenta considerando que estas son entidades distintas al SOVI, reguladas por su normativa específica, a la que no hace referencia la DT. 2.2 de la LGSS.

Esta rigurosa interpretación no puede ser compartida en línea con los criterios que venimos manteniendo. A mayor abundamiento cabe afirmar que, aunque son instituciones de previsión distintas, SOVI y SOE, coinciden en lo fundamental en cuanto a su ámbito personal de aplicación, de forma que normalmente un mismo trabajador debería estar afiliado a ambos seguros, por lo que sería posible presumir que la afiliación a uno de ellos implicara la consiguiente en el otro, máxime tras la coordinación producida por la Ley de 18 de diciembre de 1948, a la que ya hemos hecho referencia.

En cuanto a la cotización a las Mutualidades y Montepíos entiendo deben equipararse a las de SOVI cuando por las normas reguladoras de aquellas no tuviese el trabajador derecho a causar pensión. En este sentido el párrafo 2 del art. 3 de la Orden Ministerial de 31-1-41 establecía que “se considerarán también afiliados al Retiro Obrero Obligatorio todos los asalariados por los que se haya cotizado en Montepíos exceptuados que no hubieran llegado a consolidar pensión en los mismos”.

En efecto, el TCT (S. 26-10-85 RA 5744, 12-5-87 RA 9930 y 13-1-88 Colex n 45 entre otras) aplicando este precepto al Montepío de Tabacalera S.A. estima “por ficción legal” equivalente la afiliación a este con la afiliación al Retiro Obrero, de forma que —continúa argumentando el TCT— la afiliación al sistema asistencial particular de Tabacalera S.A. debe entenderse, a los efectos de la pensión SOVI, que se hallaban afiliados al Retiro Obrero y, por consiguiente, que tenían cubierta la cotización exigida para causar la pensión del SOVI. Esta doctrina respecto a este caso particular no supone un cambio de criterio dado que coincide en el tiempo con la contraria respecto a la generalidad de los Montepíos y Mutualidades, lo que resulta difícil de entender: tanto unas como otras estaban exceptuadas del Retiro Obrero por Real Decreto de 24-7-1.921, como exigía el art. 3 de la O.M. de 31-1-41.

2.1.4. La ineficacia, a efectos de causar pensión SOVI, de las cuotas satisfechas después del 1-1-1.967

Exige la DT. 2.2 de la LGSS para tener derecho a las prestaciones establecidas por el SOVI tener cubierto el periodo de cotización al que nos hemos referido “en 1 de enero de 1967”. Supone esto, como primer y fundamental efecto, la ineficacia de las cuotas satisfechas con posterioridad a esa fecha (S.

TCT 20-2-82 Colex n 365, 7-5-83 Colex n 767 y 25-6-87 RA 14199, entre otras) sin que sea posible la acumulación de cotizaciones del SOVI con las efectuadas a los regímenes de la Seguridad Social a los efectos de reunir los 1.800 días de cotización (S. TCT 12-7-88 Colex n 961).

Como consecuencia de ello la jurisprudencia priva de eficacia a las cotizaciones satisfechas en virtud de las medidas de apoyo a la jubilación establecidas por los programas del Fondo de Protección al Trabajo mediante la Orden de 16-3-84. Dichos programas tenían como finalidad “facilitar el acceso a las prestaciones de jubilación o invalidez a los trabajadores por cuenta ajena o asimilados mayores de 60 años o con invalidez total, en situación de desempleo involuntario, que tengan cubierto, al menos el 50% del periodo de cotización exigida por la Seguridad Social, pero que no puedan acceder a las prestaciones de jubilación o invalidez por no tener satisfecho dicho periodo de carencia” (art. 16.5). Tal Orden —argumenta el TCT— “no puede referirse a las pensiones del SOVI, porque lo impide externamente otra de mayor rango, la DT. 2.2 de la LGSS cuando condiciona el acceso a las pensiones del extinguido seguro...al importante y trascendental requisito de que la cotización exigida por su específica reglamentación se haya cubierto con anterioridad al 1-1-67” (S. TCT 7-10-88 Colex n 1.805, en el mismo sentido la de 20-1-89 Colex n 319 entre otras).

2.1.5. El requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas

Desde otro punto de vista, el TCT viene a afirmar “que el cumplimiento de estar al corriente en el pago de las cuotas, por una parte, no se exige por la Disposición de Derecho Intertemporal citada (la Orden 2-2-40)...” y que, “por otra parte, sólo es dable alegarlo... respecto a las cotizaciones exigibles más no de aquellas que por haber prescrito no lo fueren” (S. TCT de 31-3-82 Colex n 732, en el mismo sentido la de 30-1-84 Colex n 470, 28-1-85 Colex n 246, 12-1-88 Colex n 187...). El art. 2 de la Orden de febrero de 1940 establecía que la obligación del pago de las cuotas prescribe a los cinco años.

Sin embargo, sin perjuicio de lo anterior, exige el TCT que el causante esté al corriente de las cuotas en la fecha del hecho causante, refiriéndose a la pensión de viudedad, “pues en cualquier régimen de previsión, como en el actual sistema de Seguridad Social, el pago de las prestaciones viene condicionado a que el causante estuviera al corriente de sus obligaciones, y en especial, la de estar en alta y al corriente en el pago de las cuotas, pues en otro caso se permitiría crear los presupuestos necesarios para recibir pensión subvirtiéndose la finalidad de tal régimen y sistema” (S. TCT 12-11-83 Colex n 1490). De tal forma que “el condicionamiento de estar al corriente en el pago de las cuotas debe ser cumplido en la fecha del hecho causante y deviene obligatorio respecto de las cotizaciones exigibles en tal momento por no estar prescritas” (S. TCT 30-1-84 Colex n 470, 1-7-87 Colex n 1324...).

Entre ambos grupos de sentencias se aprecia una cierta contradicción, ante la misma nos inclinamos por la primera línea, si la Legislación del SOVI -a la que nos debemos remitir según reiteradamente nos recuerda el TCT por imperativo del "con arreglo a las condiciones exigidas por la Legislación del mismo" de la DT. 2.2 de la LGSS- no establecía esta distinción, tampoco debemos distinguir, si no establecía este requisito tampoco podríamos añadir otro y no por ello va a ocasionarse la quiebra del sistema de Seguridad Social ni se va a subvertir la finalidad de aquel régimen, el SOVI, que como hemos visto tiene más notas de asistencial que de contributivo. En todo caso, si como hemos visto las cuotas satisfechas con posterioridad al 1-1-67 carecen de eficacia, a los efectos de causar pensión del SOVI lo lógico es que efectivamente hubieran prescrito, como acertadamente dicen estas otras sentencias.

2.1.6. El cómputo de las partes proporcionales de las pagas extraordinarias a efectos de completar el periodo de carencia

Resuelta por el T. Supremo en Sentencia de 10 de julio de 1974 (RA. 3021), dictada en interés de Ley, las diferencias surgidas en el seno de la doctrina del TCT en relación con el cómputo de las pagas extraordinarias a efectos de completar el periodo de carencia preciso para causar pensión en el actual Sistema de Seguridad Social, en sentido favorable a su computabilidad, subsiste, sin embargo, la misma polémica pero trasladada ahora al Régimen del SOVI.

En efecto, parte de la doctrina del TCT -entre las que se pueden citar las sentencias de 20 y 24 de octubre de 1984 (RA. 7862 y 8137) y 24-11-87 (RA. 26141 entre otras) (9)- entiende que" de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 18-7-47 en este régimen SOVI no existen a efectos carenciales días-cuotas independientes de los naturales, exigiéndose para tales efectos que los días sean de cotización y de trabajo" (S. TCT 12-7-88 RA. 5130) lo que impide computar las correspondientes partes proporcionales de las pagas extraordinarias.

Por el contrario, otro gran número de Sentencias del TCT -por ejemplo las de 7-11-86 RA. 11212, 2-4-87 RA. 7252 y 3-5-88 RA. 3994 y otras (10)- entiende computable tales pagas extraordinarias, aunque se limitan a argumentar que siguen aquellas Sentencias del T. Supremo.

El primer grupo de Sentencias se adapta más a la literalidad de la Orden de 18-4-47 cuyo art. 2.2 efectivamente exige "que por las cotizaciones efectuadas resulte acreditada la prestación de 1.800 días de trabajo". Sin embargo, tal precepto, que por cierto se refiere sólo a la pensión de invalidez, presenta cierta contradicción con el Decreto de 18-4-47 que debía desarrollar, pues el art. 8.2 sólo hablaba de tener "reconocidas a su favor 1.800 cotizaciones". Contradicción esta que debe de resolverse lógicamente a favor de la

norma de mayor rango. Igualmente, con respecto a la pensión de vejez, el art. 7.2,b de la Orden de 2-2-40, exigía "que con anterioridad a la petición de subsidio se hayan satisfecho en su favor las cuotas correspondientes al periodo de carencia, que será... de 1.800 días".

Puede, pues, también en el régimen del SOVI hablarse de "días-cuotas, lo que presupone la posibilidad de computar las pagas extraordinarias utilizando para ello la lógica de que como la base de cotización comprende tanto el salario devengado por día o mes de trabajo como la prorrata de pagas cuyo vencimiento es superior al mes, también se está cotizando, y por consiguiente valen al efecto del periodo carencial, los días que correspondan de tales pagas extraordinarias, según lo que dispusieran las normas entonces vigentes, fundamentalmente las Reglamentaciones Sectoriales de Trabajo (S. TCT 7-10-86 RA. 9086, S. TSJ de Galicia de 26-4-90 A.L. marg. n 706/90).

2.2. El requisito de no tener derecho a otra pensión del Sistema de Seguridad Social: las incompatibilidades

2.2.1. Incompatibilidad de las pensiones SOVI con las del sistema de Seguridad Social. Referencia a las pensiones no contributivas

Condicionan la DT. 2.2 de la LGSS la percepción de las prestaciones del SOVI a que el interesado no tuviera derecho a ninguna pensión a cargo de los regímenes que integran el Sistema de Seguridad Social o de los sectores llamados a integrarse. Así se desprende, tanto de la letra como del espíritu de la norma que las pensiones del SOVI, han quedado configuradas como integrantes de un régimen residual para aquellos trabajadores que, reuniendo los requisitos exigidos en aquella antigua normativa, carezcan de protección al amparo del vigente Sistema de Seguridad Social, conservando consiguientemente el derecho a dichas prestaciones, siempre y cuando no sean perceptores de cualquier otra pensión reconocida por el actual, sea cual fuere el carácter de los mismos según doctrina del TCT reiterada en Sentencias de 1-2-84 Colex n 471, 1-9-87 Colex n 1323 y 14-3-89 Colex n 318 entre otras muchas (11).

Para el TCT "el reconocimiento del derecho a una pensión del vigente sistema, si su titular ya disfrutara de la del extinguido SOVI, equivale al cumplimiento de una condición resolutoria, positiva y mixta respecto de la firmeza de la prestación residual" (S. TCT 7-11-88 Colex n 1688). Para nada influye el hecho de que la pensión del SOVI "haya o no precedido, en su reconocimiento o devengo a la del vigente sistema, por cuanto, aunque el texto de dicha DT., en una interpretación estrictamente literal, pudiera conducir, respecto de este último extremo, a una conclusión distinta, de entender lo contrario, a una situación discriminatoria entre uno y otro beneficiario, basa-

dos, cuando menos no en pocas ocasiones, en la habilidad de instar el reconocimiento de la pensión del SOVI con precedencia a la del sistema de la Seguridad Social" (S. tct de 10-1-85 Colex n 55).

En esta ocasión la literalidad del precepto y el aspecto contributivo decae para el TCT ante el carácter asistencial o residual de las pensiones del SOVI.

Siguiendo esta doctrina las pensiones del SOVI resultarán igualmente incompatibles con las no contributivas previstas en el Proyecto de Ley actualmente en discusión que la regula, dado que éste configura las de jubilación e invalidez como pensiones del Sistema de Seguridad Social, como hemos visto. No tienen, sin embargo, porque resultar incompatible con las prestaciones familiares por hijo a cargo en la modalidad no contributiva, conforme a los arts. 166 y siguientes de la LGSS, según la redacción que les dará de aprobarse el mencionado Proyecto de Ley, pues, no está incluido este supuesto en el art. 169 que se refiere a las incompatibilidades, ni estas prestaciones se configuran como "pensiones". No podrán acceder, sin embargo, los beneficiarios del SOVI a tales prestaciones en su modalidad contributiva, puesto que éstas se reservan para los trabajadores por cuenta ajena y para los "pensionistas de este Régimen General".

2.2.2. La compatibilidad o incompatibilidad de las pensiones SOVI con otras causadas antes del 1 de enero de 1967

Interpretada la DT. 2.2 de la LGSS en sentido contrario no se puede afirmar la incompatibilidad de la pensión SOVI con otra causada antes del 1-1-67 cuando a tenor de la Legislación anterior resultare compatible. En este sentido se pronuncia el TCT (S. 29-6-83 Colex n 1063, 14-7-84 Colex n 1093, 21-5-85 Colex n 973...).

Por el contrario será incompatible con otra pensión que con arreglo a la Legislación anterior al 1-1-67 así lo fueren y ello como consecuencia fundamental de que la DT. 2.2 exige como tercer requisito para tener derecho a las prestaciones del SOVI que reunieran "las condiciones exigidas por la Legislación del mismo".

Norma clave del régimen anterior, en este aspecto, es la Orden de 10 de agosto de 1957 que derogó el art. 9 de la de 2 de febrero de 1940 que disponía:

"Las pensiones de vejez, invalidez y viudedad de SOVI son incompatibles entre sí, concediéndose un derecho de opción por la que se considere más beneficiosa cuando concurra causa de incompatibilidad" (artículo 1). Igualmente declaraba que "el percibo de las pensiones de vejez e invalidez es incompatible con la que determine la inclusión del pensionista en un régimen o rama de subsidios o seguros sociales obligatorios" (art.21).

El art. 3, por su parte, establece que se suprimen las restantes causas de

exclusión o incompatibilidad prevista por la Legislación vigente para el reconocimiento del derecho y percepción de las prestaciones del régimen del Seguro de Vejez e Invalidez".

Abundante jurisprudencia del TCT cita estos preceptos o sus precedentes (art. 9 de la O.M. de 2 de febrero de 1940 y O.M. de 24 de octubre de 1946 que fueron derogados por aquella norma o los arts. 36 y 7 del Decreto-Ley 2-9-55 respecto a la viudedad) para confirmar la incompatibilidad entre las distintas pensiones del SOVI, sea cual fuese la causa de la misma o la rama a la que pertenecieran (S. TCT 12-2-82 Colex n 364, 11-5-84 Colex n 807, 17-2-87 Colex n 506 (12)).

Hemos visto como el art. 3 de la O.M. de 10-8-57 contenía una cláusula abierta que establecía como regla general la compatibilidad de las prestaciones del SOVI con cualquier otra no expresamente declarada allí incompatible. Por consiguiente, resultan compatibles con las pensiones de Invalidez o Viudedad derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional (circular del INSS n 66/82 de 28 de junio B.I.N.S.S. n 3 de 1982, S. del TCT 29-6-83 Colex n 1.063, 14-7-84 Colex n 1093, 21-5-85 Colex n 973...). E igualmente resultan compatibles con las pensiones causadas conforme a la Legislación y estatutos de Mutualidades Laborales y Montepíos (Circular citada, S. 14-7-84 Colex n 1093, 21-5-84 Colex n 1090...) con anterioridad al 1-1-67.

2.2.3. Incompatibilidades de las pensiones del SOVI con las de los sectores o entidades que han de integrarse en el sistema de seguridad Social

La DT. 2.2 de la LGSS condiciona, como hemos visto, la conservación del derecho a causar las prestaciones del SOVI a que los interesados no tengan derecho a ninguna otra pensión de los regímenes que integran el sistema de Seguridad Social; pues bien, "entre tales pensiones se entenderán incluidas las correspondientes a las entidades o sectores laborales que han de integrarse en dicho sistema de acuerdo con lo previsto en los números 6 y 7 de la DT. da la LGSS.

En tal supuesto se encuentran, según el TCT los trabajadores afiliados al Montepío de Empleados de Obreros del Puerto (S. 5-5-84 Colex n 810, 26-3-87 Colex n 507...), los de la Caja de Pensiones del Banco de España (S. 3-3-89 Colex n 476..) y ello "con independencia de que el Gobierno haya hecho uso o no de la facultad que la norma intertemporal (DT. 6, 6 y 7) le confiere, de determinar la forma y condiciones" de su integración en el sistema (S. TCT 5-5-84 Colex n 810).

No se encuentran en este caso, y por ello son compatibles con las prestaciones del SOVI, las pensiones que, como clases pasivas, reconoce la Administración del Estado a los funcionarios "en tanto no se instaure o desarrolle el régimen especial de los funcionarios civiles del Estado" (S. TCT 28-5-83

Colex n 936, 15-7-85 Colex n 1102, 29-11-83 Colex n 1642). La contradicción con la jurisprudencia antes citada es evidente. No obstante, el mismo criterio sigue el TCT respecto a la compatibilidad con las clases pasivas de los militares (S. 29-1-82 Colex n 368, 28-5-83 Colex n 936, 15-2-84 Colex n 269...).

Claramente no se encuentran en este supuesto de incompatibilidad las pensiones percibidas por los ex-combatientes y mutilados de la guerra civil (S. TCT 20-4-85 Colex n 974, 11-5-85 Colex n 972, 4-1-89 Colex n 44...) pues estas pensiones son concedidas por la Administración del Estado y no constituye ningún sector "laboral" que haya de integrarse en dicho sistema de Seguridad Social.

2.2.4. La no revalorización de las pensiones SOVI en caso de compatibilidad

Pero resulta que, incluso cuando la pensión SOVI es considerada compatible, generalmente no se verá afectada por la mejoras que sucesivamente la legislación va aprobando, con excepción de la mejora establecida en el año 1979. Supone ello su congelación en 1.140 ptas. al mes pues "las pensiones SOVI no se revalorizarán cuando concurren con otras cedidas por el Estado, si la suma de las pensiones concurrentes es superior, en cómputo anual, a la cuantía fija, calculada igualmente en cómputo anual, establecida para las prestaciones de dicho seguro" (S. TCT 28-4-88 Colex n 520, en el mismo sentido S. 30-4-82 Colex n 733, 5-3-86 Colex n 636, 19-5-89 Colex n 851..) en aplicación de las sucesivas normas sobre revalorización de pensiones.

2.2.5. El sistema de incompatibilidades del SOVI y el principio de igualdad

El régimen actual de incompatibilidades es pues más severo que el dispuesto en relación con el actual del Sistema de Seguridad Social (que permite, por ejemplo, la compatibilidad de la pensión de viudedad con cualquier renta de trabajo -art. 166.1 de la LGSS- y con la pensión de jubilación o de invalidez que pueda disfrutar el cónyuge superviviente -art. 10 O.M. de 13-2-67-).

Planteada la cuestión de la adecuación de esta diferenciación al principio de igualdad establecido en el art. 14 CE., el T. Constitucional ha considerado que este tratamiento desigual no se encuentra proscrito pues no existe el presupuesto básico de la identidad entre las situaciones a comparar, ya que "se quiere comparar el tratamiento jurídico de situaciones diferentes, como son aquellas generadas en distintos sistemas de protección, reguladas por distintas normativas y sometidos a condiciones y requisitos diversificados. La

identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su propia normativa, no constituye un imperativo jurídico" (S. T.Co. 103/84 de 12 de noviembre F.J. 4).

Presenta esta Sentencia cierta contradicción con la ya citada del T.Co. 19/82 de 5 de mayo, en la que se analizaba la cuestión de la compatibilidad entre una pensión de vejez y otra de viudedad del Régimen Especial Agrario, que le fue denegada al recurrente por haber ocurrido el hecho causante con anterioridad al 1-1-71, fecha en la que entró en vigor la Ley de 22-12-70 que suponía la desaparición de la incompatibilidad de las citadas pensiones. En esta ocasión el T.Co., tras considerar que el principio de igualdad ha de interpretarse en el sentido más favorable a la realización de los objetivos constitucionales establecidos en el art. 50 y en el 9.2 de la CE., "lo que significa un especial rigor a la hora de considerar justificada una desigualdad en este terreno", decía que "desde este punto de vista parece claro que no es motivo suficiente para establecer un trato diferente, en cuanto a la compatibilidad de pensiones, el dato de que el hecho causante se haya producido antes o después de determinada fecha" (F.J. 6).

El propio T.Co. trata de salvar esa contradicción pues en aquella Sentencia (103/84) señala que "la incompatibilidad es, pues, el resultado de una modificación normativa... que no puede hacerse equivaler a una desigualdad de trato temporal, pues no es el transcurso del tiempo el que origina la diferencia de régimen, sino una sucesión de normas que responden a principios y condiciones diversas" (F.J. 3). Pero resulta que ese dato también se daba en aquella primera Sentencia, la 19/82, donde la diferenciación traía su origen en una Ley que también obedecía a principios y condiciones diversas puesto que establecía que el nivel de protección de los trabajadores autónomos del REA en ningún caso sería inferior al de sus equivalentes de la industria y de los servicios (13). En tal caso la razón de la diferencia parece radicar en la importancia del cambio normativo que en el supuesto de la Sentencia 103/84 suponía que estábamos en "situaciones diferentes como son aquellas generadas en distintos sistemas de protección". Diferencia esta que también resultó relevante para el T.Co. en la Sentencia 70/83 de 26 de julio, a la que nos referiremos más adelante. Más ello no supone un cambio de orientación en la doctrina del T.Co., al menos no de un cambio definitivo, pues posteriormente, si bien se daban factores anejos, la misma parece inclinarse hacia las posturas inicialmente mantenidas (14).

En realidad las aparentes variaciones de la Jurisprudencia Constitucional en esta materia viene motivada porque el juicio de la razonabilidad objetiva de la diferenciación y de la proporcionalidad de la medida en relación con la finalidad perseguida es sumamente complicado por ser múltiples los factores que se deben valorar. Entre ellos cabe destacar que el SOVI desde sus oríge-

nes estableció la incompatibilidad de sus pensiones, en consecuencia con su naturaleza predominantemente asistencial, mientras que en la Ley General de la Seguridad Social se impone el carácter contributivo. En este caso no se trata de negar un mínimo vital sino de un caso de concurrencia de pensiones. Lo contrario no sobrepasaría, a mi entender, el juicio de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida pues "ni la finalidad de la medida, ni el factor diferencial, ni la propia medida diferenciadora" (15) serían compatibles con los fines perseguidos por la Constitución en sus arts. 9.2, 41 y 50 fundamentalmente.

3. LAS PRESTACIONES DEL SOVI

3.1. La pensión de vejez del SOVI

El llamado en la Ley 1-9-39 y la O.M. de 2-7-40 "subsidio" de vejez, en clara referencia a su carácter asistencial, se otorga a los que reuniendo los requisitos anteriores "hayan cumplido sesenta y cinco años, si bien cabe una especie de jubilación anticipada o vejez prematura desde los sesenta años "si padecen una incapacidad total para el ejercicio de su profesión, no derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable".

La pensión de vejez del SOVI es incompatible con la realización de cualquier trabajo o actividad que determine la inclusión del pensionista en un régimen o rama de subsidios o seguros sociales obligatorios (art. 2 de la O. de 10-8-57, que trae su origen del art. 9 de la O. de 2-2-40 que establecía su incompatibilidad "con todo tipo de trabajo remunerado"). En sus orígenes, en virtud del art. 8 de la O. 2-2-40 y hasta la citada Orden del 57 que lo derogó, carecían del derecho al "subsidio" los:

"A) Que paguen por contribución una cuota al Tesoro superior a 100 ptas anuales.

"B) Que sus medios de fortuna, invertidos en cualquier forma, le reporten un ingreso mensual superior a 90 ptas (cuantía a la que ascendía el subsidio - art.6-).

"C) Que perciban del Estado, Provincia o Municipio una pensión vitalicia igual o superior al subsidio que en este régimen se determine..."

Lógicamente este precepto que hoy no tiene vigencia alguna, pues está expresamente derogado, como hemos dicho, se trae a colación por simples razones de curiosidad, para demostrar el carácter marcadamente asistencial que tal pensión tenía desde sus orígenes. Hoy la incompatibilidad queda como hemos visto en el capítulo anterior, subsistiendo además la incompatibilidad del jubilado con la realización de cualquier trabajo. Por lo demás no se plantean mayores problemas.

3.2. La invalidez

El Decreto de 18 de abril de 1947 que nació con el propósito de preparar un sistema de protección para el riesgo de invalidez, en realidad, "forma parte esencial de esa historia de frustraciones que ha sido la cobertura general de la invalidez" (16), pues, si bien su art. 7 consideraba como invalidez "aquella que produzca en él que la sufra la pérdida de su actividad que le imposibilite ganar en un trabajo adecuado a sus fuerzas, su capacidad, su instrucción y la profesión ejercida, un tercio al menos de lo que gane habitualmente un asalariado de la misma categoría, sano física y mentalmente, de instrucción análoga, en la misma localidad", en realidad la cobertura de este tipo de invalidez nunca llegó a tener una vigencia efectiva. Mientras tanto, sólo tenían derecho a pensión de invalidez los que además de cumplir los requisitos comunes antes citados estén en las siguientes circunstancias:

"1. Que la invalidez sea absoluta y permanente para todo trabajo de su profesión habitual y sus ingresos actuales sean inferiores de la tercera parte de los que obtendría en dicha profesión" (art. 8 D. 18-4-47) y que el inválido no lo sea "por causa al mismo imputable o derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable" (art. 7 "in fine" del Decreto citado al que remite el 8).

"2. Que la afiliación al régimen general del Subsidio de Vejez esté realizada, al menos, cinco años con antelación a la fecha en que sea declarada la invalidez..." (art. 2.2 Orden 18-4-47).

"3. Que tenga cincuenta años cumplidos. Esta edad se rebajará hasta los treinta en los casos de invalidez siguiente:

a) Pérdida total o en sus partes esenciales de las dos extremidades superiores o inferiores.

b) Pérdida de movimiento análogo a la mutilación de las extremidades superiores o inferiores.

c) Pérdida total de la visión.

d) Enajenación mental incurable".

Tras la transcripción de estos preceptos conviene precisar algunos aspectos:

3.2.1. El grado de invalidez exigible

De la dicción de los arts. 8 del Decreto de 18-4-47 y del 2 de la Orden de 18-4-47 se deduce que la invalidez exigida es la que incapacita de forma permanente "para todo trabajo de su profesión habitual" que se asemeja claramente a la "incapacidad permanente total para la profesión habitual" del art. 135.1,b LGSS, definida en su apartado 4. No obstante, el que aquellos pre-

ceptos utilicen el calificativo de "absoluta" ("que padezca invalidez absoluta y permanente para todo trabajo de su profesión habitual") ha provocado cierta confusión en la jurisprudencia del TCT, así un gran número de sentencias entienden que el grado de invalidez exigible es el de "incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo" a semejanza del art. 135.1,c y 135.5 de la LGSS (Dos sentencias del TCT de 18-12-87 RA 28779 y 28780, otra de 16-11-87 RA 25116 y otras muchas), mientras que la mayoría de las sentencias sólo se refieren a la que incapacita para la profesión habitual (S. TCT 1-4-82 Colex 730, 26-1-87 Colex 255 y 10-10-87 Colex 1459 entre otras).

Es esta segunda línea jurisprudencial la que debe entenderse más acertada conforme a la citadas disposiciones. No tendría sentido, en otro caso, el art. 3 de la O. 18-4-47 que estima como "profesión habitual, a los efectos del n 1 del art. anterior, aquella a la que el productor dedicó su actividad antes de sobrevenir la invalidez y constituía la base esencial de su existencia" y la previsión, incluso, de que "de haber tenido diversas profesiones u oficios será la habitual durante más tiempo, computándose, a estos efectos, el trabajo prestado durante los cinco últimos años anteriores a la fecha en que se produzca la invalidez alegada". Regulación que, por lo demás, es similar a la de la Invalidez Permanente Total de la LGSS.

Tampoco tendría sentido el art. 7 de la misma Orden (aunque debe advertirse que se derogó por la Orden de 10-8-57 que estableció la incompatibilidad con cualquier tipo de trabajo) que disponía que "las empresas que ocupen a trabajadores declarados pensionistas por invalidez podrán disminuir el salario mínimo establecido en cada momento para los de su clase y categoría en la misma cuantía que la pensión...", lo que lógicamente permitía que el trabajador prestara servicios en otra actividad; invalidez pues total y no absoluta si utilizamos la terminología de la LGSS.

3.2.2. Los grados de invalidez en el SOVI

Debemos partir de la premisa de que el SOVI no contemplaba la existencia de diferentes grados de invalidez permanente, siendo la cuantía de la pensión única, fuera cual fuese el estado de incapacidad (En este sentido S. del TCT de 21-9-83 Colex n 7621, 17-12-87 RA 28680 y 14-6-88 Colex n 959).

Ahora bien, esta afirmación debe matizarse, pues, siendo cierto que, a diferencia de la LGSS, en el SOVI no existen grados a efectos de determinar la cuantía de la pensión, existe cierta graduación a los efectos de determinar el derecho a la misma. Me refiero al caso establecido en el art. 8.3 del Decreto de 18-4-47, que exigiendo como requisito general para causar derecho a pensión la edad de 50 años, ésta se reducía hasta los 30 años en determinados casos:

"a.- Pérdida total, o en sus partes esenciales, de las dos extremidades superiores o inferiores,

"b.- Pérdida de movimiento de las dos extremidades en las mismas condiciones indicadas en el apartado precedente,

"c.- Pérdida total de la visión y

"d.- Enajenación mental incurable".

Lista que recuerdan al grado de "invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo" del art. 135.1,c de la LGSS.

Algún autor (17) entiende que debería aplicarse el incremento del 50% a la pensión SOVI a los que se encuentran en situación de gran invalidez, argumentando que en realidad no es un grado nuevo sino una prestación extra para proteger a los más afectados por las secuelas invalidantes, que tal incremento tiene naturaleza de prestación asistencial, que lo contrario se opondría al principio de igualdad y, por último, que la Ley 13/82 de 7 de Abril (al derogar el art. 135 de la LGSS en el sentido de que no se exigirá, para ser declarado gran invalidez, estar afecto de invalidez permanente absoluta) no contiene "precepto alguno que restrinja su aplicación a los incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y de los Regímenes Especiales asimilados a aquel en materia de invalidez". Sugerente propuesta que entiendo acorde con los principios de justicia y equidad que proclama la constitución y que podría verse reforzada con la promulgación del proyecto de Ley de Pensiones no contributivas que en la nueva redacción del art. 137 bis.6 de la LGSS establece el derecho "a un complemento equivalente al cuarenta por ciento del importe de la pensión que les haya sido reconocidas a favor de las personas, que cumpliendo los requisitos establecidos para causar derecho a la pensión de invalidez en la modalidad no contributiva, estén afectadas por una minusvalía o enfermedad crónica en grado igual o superior al setenta por ciento y que como consecuencia de pérdidas anatómicas o fisiológicas, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida...". Pues el carácter asistencial de este complemento en este caso es más patente y su no aplicación al SOVI podría dar lugar al absurdo de que entre dos personas en la misma situación de "gran invalidez" y necesidad percibiera menos ingresos el que tenía derecho a la de naturaleza contributiva, en virtud de sus cotizaciones al SOVI.

3.2.3. El requisito de la edad

El requisito de la edad, (50 o 30 años según el grado de invalidez), parece a todas luces arbitrario (18) y tras la promulgación de la Constitución debe entenderse derogado por contrario al principio constitucional de igualdad. No entiendo aquí trasladables los argumentos expuestos por el T. Constitucional en S. 137/87 de 22 de julio en relación con el requisito de la edad para tener

derecho al complemento por la llamada "invalidez permanente total cualificada" del Sistema de Seguridad Social (art. 136.2 de la LGSS y art. 6 del Decreto 1646/72 de 23 de Junio) porque en este segundo caso "el requisito de la edad no es el único determinante de la denegación del incremento de la pensión" sino que se atienden también otros factores (falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia) que añadidos a la capacidad física residual entrañan una mayor dificultad real en la posibilidad de iniciar una nueva actividad laboral (FJ. 3). No son trasladables, digo, porque en el precepto que analizamos se contempla la edad al desnudo, sin otro orden de circunstancias. Es más, podría darse el caso de que en el inválido que pretende una pensión de invalidez del SOVI concurrieran además de esos otros factores excepto la edad que le imposibilitaran cualquier tipo de trabajo dejándolo en la más absoluta de las indigencias. Ya no se trata aquí de conseguir una mayor pensión, sino de tener derecho o no a ella. No se trata de elegir entre el algo y el más, sino entre el poco y el nada. No sería en este caso razonable, ni justificado, ni mucho menos proporcional este trato desigual que por ello devendría inconstitucionalidad.

Sin embargo, el TCT ha entendido exigible este requisito de la edad (S. 10-2-82 Colex n552, 3-11-87 RA 23923, 20-11-87 RA 25769, 9-12-87 RA 27580 y otras muchas). También el T. Supremo (S. 13-3-82 Clex n729). Para el TCT "En ningún modo puede estimarse que han quedado derogados por la Constitución Española los arts. 8 del Decreto 18-4-47 y el 2 de la Orden de 7 de junio del mismo año..., pues en modo alguno puede existir discriminación con el resto de los asegurados en la Seguridad Social a los que -dice- no se les exige requisito alguno de edad y no sólo por ser campos jurídicos distintos, sino también porque, incluso, en la primera Ley de Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de enero de 1967 se exigía tener cumplidos 45 años para percibir pensión vitalicia por Invalidez común" (lo que se derogó). Tesis que no debe considerarse correcta pues la discriminación se produce además entre afiliados al mismo SOVI, según tengan o no cumplida la edad de 50 años o la de 30 según los casos. Diferencia de edad que, en sí misma, considerada no es relevante a efectos de imponer tan importante -vital- consecuencia legal de privar de una pensión -por lo demás escasa- a un inválido indigente.

3.2.4. Vinculación entre el cese en el trabajo y las taras invalidantes

A los requisitos antes aludidos debe añadirse otro, por obra de una reiteradísima jurisprudencia (así por ejemplo, S. del TCT 4-6-82 Colex n1093, 15-1-85 Colex n 244, 30-6-88 Colex n1149...(19)), se trata de que para tener derecho a esta pensión es necesario que la enfermedad o defecto motivador de la invalidez hubiera sido determinante del cese en el trabajo.

Así puede leerse en esa jurisprudencia el siguiente argumento: "Ciertamente es que la vinculación entre el cese en el trabajo y las taras invalidantes no viene exigida positivamente por la O.M. de 18-6-47 y por el Decreto 18-4-47, que en sus arts. 2 y 8, respectivamente, establecen los requisitos de afiliación, edad, carencia... pero ha de mantenerse que la pensión de invalidez va necesariamente vinculada a la condición de trabajador y cuando ésta se pierda por propia decisión o por causas ajenas a la contingencia protegida por la pensión de invalidez, si después, una vez perdida la condición de trabajador, sobreviene una enfermedad invalidante, al no incidir esta en la situación laboral efectiva de quien la padece, falta la finalidad esencial de la prestación, que es la indemnización al trabajador del perjuicio causado en su condición de tal por una enfermedad que le impide continuar en su actividad productiva..." (S. TCT 2-3-87 Colex n 709). No concuerda esta tesis con el carácter predominantemente asistencial de las pensiones SOVI y, por otra parte, es muy dudoso que la finalidad de ésta sea indemnizar por un cese en el trabajo, sino más bien la "de proteger al inválido por lo que lo es" y "no solamente porque carezca de capacidad para el trabajo" (20). Incluso este requisito no es exigible en el actual sistema de Seguridad Social "dada la regla general de compatibilidad entre pensión de invalidez y trabajo" (21). Tampoco debería serlo en el SOVI pues, como hemos visto, en sus orígenes se permitía su compatibilidad con el trabajo (art. 3 de la O. de 18-6-47).

La exigencia de este requisito por el TCT supone la imposibilidad de acceder a la pensión si el cese en el trabajo se produjo con anterioridad a la solicitud por causas ajenas a la enfermedad. Este requisito aunque presente cierta analogía con el de estar de "alta" al sobrevenir la contingencia o situación protegida del 94.1 de la LGSS -hoy desaparecido respecto de la Invalidez Permanente Absoluta y Gran Invalidez (art.1 de la Ley 26685 de 31 de Julio no aplicable al SOVI)- no debe ser confundido con éste, sino que más bien el TCT parece referirse a que no hayan transcurrido más de 5 años desde que el solicitante dejó de ejercitar su profesión habitual (S. del TCT de 15-12-82 Colex n1892, 18-1-85 Colex n244, 10-10-87 Colex n 1459, entre otras que citan en su apoyo el art. 3 de la O.M. de 18-6-47 y el 7 del Decreto 18-4-47).

3.3. La prestación por viudedad

3.3.1. Problemática general

La única prestación por "muerte y supervivencia" reconocida por el SOVI es la de viudedad que se establece en virtud del Decreto-Ley de 2-9-55. El carácter asistencial, propio de este tipo de prestaciones se encuentra en el

sistema del SOVI mucho más acusado, pretende igualmente subvenir a las situaciones de necesidad que se crean para las personas que dependen económicamente de otra, cuando ésta muere, pero la dependencia económica que, en este caso, se exige es de carácter vital, por cuanto que:

1. está sometida a un riguroso régimen de incompatibilidades, como ya hemos visto.
2. incluso "se suspenderá su percepción durante el tiempo en que la misma -la viuda, hoy, como veremos, también el viudo- realice trabajos remunerados por cuenta ajena o los desempeñe con carácter lucrativo por cuenta propia, cuando los beneficios de su explotación sean como mínimo equivalentes al importe de esta prestación" (art. 7) y
3. por último, porque se exige que el beneficiario haya "cumplido sesenta y cinco años de edad" o se encuentre "totalmente incapacitado para su trabajo".

En definitiva, se trata de proteger de la más absoluta de las indigencias ocasionada por el fallecimiento del trabajador de quien dependía absolutamente, mediante una pensión escasa -26.290.-ptas mensuales-. No obstante ello, no será nada fácil obtener los requisitos precisos para obtenerla. En efecto, se establecen los siguientes requisitos:

3.3.2. *Requisitos referidos al sujeto causante*

El primer elemento que debe concurrir, como es obvio, es la muerte del trabajador, pero sólo, precisará el TCT, la ocurrida con posterioridad al 1-1-56, fecha en la que según la Disposición Final Primera del Decreto 2-9-55 entraba en vigor el mismo, pues expresamente exige su art. 3 que el causante "fallezca con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Ley..." (S. del TCT 25-1-82 Colex n167, 26-10-85 Colex n 663, 9-6-88 Colex n 1150 y otras muchas (22)). Nos encontramos, pues, "ante una diferencia de tratamiento motivada por el momento en que se produce el hecho causante pues se niega una pensión que se reconocería si el fallecimiento hubiera ocurrido con posterioridad al" 1 de enero de 1956 (los entrecomillados pertenecen a la S. del TCT 19/82 de 5 de mayo).

Por lo que se plantea, una vez más, el problema de si "la desigualdad así producida resulta discriminatoria". A ello trata de dar respuesta la S. del T.Co. 19/82 que tras citar el art. 1.9.2, 53.3 y 50 de la CE., llega a la conclusión de que el TCT "al aplicar esta Legislación anterior establece un régimen discriminatorio, por cuanto entiende que el hecho condicionante de la percepción es aplicar a las situaciones de las viudas que comenzaron con anterioridad a la nueva legislación, mientras que a las situaciones originarias después de ésta no se aplica". "Con esta interpretación, que no tiene debidamente en cuenta el carácter esencialmente dinámico de la Seguridad

Social...ni, en general los criterios dimanantes, hoy, de la Constitución, se ha vulnerado el art. 14 de ésta, provocando una desigualdad opuesta a los principios que la inspiran" (FJ. 8).

Sin embargo, esta doctrina -dirá el TCT- no es trasladable al supuesto que estamos contemplando porque allí el T.Co. "contempla la supresión de un requisito del mismo régimen para una prestación existente, pero no alcanza a la creación ex novo de prestaciones" (S. del TCT 31-3-87 Colex n 712) "sino más bien la expuesta por el Tribunal en la de 26 de julio de 1983, n 70" (S. TCT 8-1-87 Colex n 57).

La Sentencia del T.Co. 19/82 se refería a la diferencia surgida a raíz de la entrada en vigor de la Ley de 22 de diciembre de .972 que, al establecer que el nivel de protección de los trabajadores autónomos del R.E.A. en ningún caso será inferior al de los trabajadores por cuenta propia del Régimen General, supuso la desaparición de la incompatibilidad entre las pensiones de jubilación y viudedad. La Sentencia del T.Co. 70/83 analiza el criterio del TCT de que la Ley de 4 de enero de 1980 (que en caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral con anterioridad al 1 de julio de 1975 se otorgara a la viuda del trabajador por cuenta propia o pensionista del R.E.A. aunque ésta tuviera menos de 50 años) sólo es de aplicación a las viudas de quienes fallecieron con posterioridad al 1 de enero de 1967. Diferencia que el T.Co. no entiende contraria a la CE. porque en esa fecha 1-1-67 se produjo una alteración sustancial en la regulación de la previsión pues se "dio entrada en la Seguridad Social al referido R.E.A., todo lo cual aleja la identidad de situaciones que se pretende poner de relieve" (FJ. 3).

El supuesto que estudiamos está a mitad de camino entre uno y otro caso, ciertamente no se trata simplemente de la supresión de un requisito para causar pensión, pero tampoco supone una alteración sustancial en la regulación de la Previsión Social. Supone en efecto la introducción "ex novo" de una prestación, pero dentro de un mismo sistema -el SOVI- . ¿Es este elemento diferenciador relevante para establecer una desigualdad entre quienes perciben una pensión escasa y quienes se encontrarán en la indigencia, durante su vejez o invalidez? A mi entender, la respuesta debe ser negativa, esa diferenciación no es proporcional en relación con los fines que persigue la Constitución.

El segundo requisito se deduce del art. 3 del Decreto-Ley 2-9-55 "La Caja Nacional del SOVI concederá con cargo a sus fondos una prestación a las viudas de los trabajadores beneficiarios del expresado Seguro o aquellos que hubieren tenido derecho a él...", es decir, que el sujeto causante sea "pensionista de hecho o en potencia, que hubiera podido serlo en el momento de morir" (23).

Pensionista en potencia será quien reúna los requisitos antes visto para causar pensión de jubilación o invalidez. También este requisito ha sido interpretado restrictivamente por el TCT, al exigir que el causante "cuenta

con 65 años de edad o sufra invalidez que le hubiera obligado a abandonar el trabajo" (24). Exigencia que no debe compartirse, pues parece lógico y presumible entender como situación de invalidez el periodo de enfermedad —más o menos largo— previo al fallecimiento. Hecho este que acredita ineludiblemente el carácter irreversible e invalidante de aquella enfermedad, por muy súbita que se produzca la muerte.

3.3.3. Requisitos referidos al sujeto beneficiario

3.3.3.1. Requisito referente al sexo del beneficiario

Como hemos visto el art. 3 del Decreto Ley 2-9-55 concedía la prestación de viudedad sólo a "la viuda". A este respecto —y aún con posterioridad a las Sentencias 103 y 104/83 de 22 de noviembre del T.Co., que declararon inconstitucional y, por lo tanto, nulo el párrafo del art. 160 de la LGSS y el inicio primero del párrafo de dicho art. que dice "la viuda" reconociendo, por imperativo del art. 14 de la Constitución Española, tal derecho al viudo— el TCT entendía que tal requisito no podría considerarse derogado por la Constitución (así reiteradas S. del TCT 6-11-86 RA 11181, 5-5-87 RA 9324 y 20-588 RA 4108 (25)).

Tal doctrina del TCT mereció la crítica del T. Constitucional que, en las Sentencias 253/88 de 20 de diciembre, 144/89 de 18 de septiembre y 176/89 de 30 de octubre, sientan el criterio de que de la pensión de viudedad del SOVI puede beneficiarse tanto el varón como la mujer viudos que reúnan las demás condiciones exigidas, por imperativo del art. 14 de la CE.

Merece la pena detenerse en algún argumento del T. Constitucional al respecto, por cuanto que vienen a confirmar algunas de las tesis aquí mantenidas. Según reiterada doctrina del T.Co. la igualdad proclamada por el art. 14 CE "entraña que las consecuencias jurídicas que se derivan de supuestos de hecho iguales sean asimismo iguales, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando el elemento diferenciador introducido por el legislador carece de relevancia y de fundamento racional y corresponde a quienes asumen la defensa de la legalidad impugnada, y, por consiguiente, la defensa de la desigualdad creada por tal legalidad, la carga de justificar que la diferencia establecida satisface los requisitos de necesidad y de racionalidad en orden a la protección de los bienes y derechos o a la consecución de los fines que la norma persigue" (FJ. 5 de Sentencia del T.Co. 253/88, reiterada en FJ. 3 de la 144/89 y FJ. 3 de la 176/89).

No justifica ese trato desigual el principio de equilibrio financiero (generalmente argumentado por el TCT) del sistema en su conjunto, que si bien, "puede (éste) ser un factor a tener en cuenta por el legislador en el momento de configurar un sistema concreto de Seguridad Social" no puede, sin embar-

go, "fundamentar el mantenimiento de las situaciones que suponen una vulneración por parte de dicho sistema de derechos reconocidos en la Constitución" (FJ. 6 de la Sentencia del T.Co. 253/88).

"En cuanto a la diferenciación entre el régimen general de la Seguridad Social y el especial del SOVI, esa falta de identidad entre ambos regímenes... no resulta tampoco relevante para justificar la diferencia de trato existente en el SOVI, en relación con las prestaciones de viudedad".

3.3.4. Requisito referido a la edad o invalidez

Exige además el art. 3 del Decreto Ley 2-9-55 que el beneficiario reúna una serie de condiciones, entre ellas, "el haber cumplido 65 años de edad o encontrarse totalmente incapacitado para todo trabajo".

Ahora bien, dispone el art. 6 que "Si al fallecer el Trabajador asegurado su viuda (ahora también viudo) no hubiera alcanzado los 65 años de edad, pero tuviera más de 50, conservará el derecho a reclamar la prestación al cumplir dicha edad de 65 años, siempre que reúna las demás circunstancias señaladas en el art. 3...".

Tanto el requisito de la edad (50 años) como el alternativo de la invalidez (que en los términos de la LGSS equivaldría a la Invalidez Absoluta, aunque sin la nota de la permanencia pues ninguna referencia a tal nota se establece, e incluso, como hemos visto, se prevé la posibilidad de suspensión durante el tiempo que se presten servicios por él/ella viudo/a), deben concurrir en el momento del fallecimiento del causante, según reiterada jurisprudencia del TCT (S. del TCT de 1-6-84 Colex n 1094, 8-1-87 Colex n 57, 22-6-88 Colex n 960...(26)). De forma que la invalidez del viudo/a, posterior a la muerte de su cónyuge no da derecho a la pensión (S. 20-4-85 Colex n 977).

Para el TCT la exigencia del requisito de la edad (no exigido en la actual regulación de la viudedad del Sistema de Seguridad Social) no supone discriminación respecto de los causahabientes de los trabajadores incluidos en el actual Sistema de Seguridad Social (S. TCT 3-3-87 RA 4819) "ya que la distinción de requisitos entre los sucesivos regímenes de previsión y de Seguridad Social no es discriminatoria, sino acomodación de los beneficios a las cargas soportadas, en un sinalagma que no puede ser desconocido cuando se trata de relaciones bilaterales.." (S. TCT 8-1-87 Colex n 57 y 22-6-88 Colex n 960).

De nuevo se repiten los mismos argumentos (el equilibrio financiero del sistema de previsión social en su conjunto y la diferenciación entre el sistema de Seguridad Social y el SOVI), pero en este caso coinciden con el criterio mantenido por el T.Co. en la Sentencia 70/83 de 26 de julio a la que ya nos hemos referido. En la misma, se trataba de examinar si la eliminación del requisito de los 50 años operada por la Ley de 4 de enero de 1980, que según

el TCT no afectaba a las viudas de quienes fallecieron antes del 1 de enero de 1967 (indirectamente se refiere también al SOVI), era conforme al principio de igualdad. El hecho de que se regulen por regímenes de previsión diferentes "aleja la identidad de situaciones" presupuesto necesario para poder apreciar vulneración del art. 14 de la CE., según el FJ. 3 de la citada Sentencia.

En efecto, esta tesis, en cuanto que lo que trataba era de comparar situaciones nacidas bajo diferente sistema de previsión social, ha de estimarse correcta. Pero, si se analiza desde otro punto de vista, la solución quizás pudiera ser diferente. Me refiero a la diferencia que surge dentro del mismo SOVI entre quienes tienen más de 50 años y quienes tienen menos. ¿Es este factor —la edad— relevante para establecer una diferencia jurídica que supone la privación de una prestación que hemos definido como vital?

En respuesta a este interrogante podríamos reproducir la solución expuesta en relación con el requisito de la edad respecto a la prestación por invalidez. Pero existen notables diferencias: allí el afectado era una persona impedida, aquí una persona sana. Allí se compensaba una situación de necesidad, aquí sólo existe una expectativa de derecho y se parte de la presunción de que una persona de más de 50 años tiene menores posibilidades de trabajo que otra más joven. La edad aquí no concurre necesariamente con una invalidez es, pues en este caso, posiblemente en alguna manera razonable la diferenciación.

Debe notarse que aquí, lo que refuerza la argumentación de lo caprichosa de aquella otra diferenciación, cuando el viudo/a se encuentran afectado por una invalidez, no se precisa requisito alguno de edad.

3.3.5. No tener derecho a otra pensión del SOVI o del Sistema de Seguridad Social

Otro requisito exigido es "b) que no tengan derecho al Seguro de Vejez o de Invalidez", que debe ser entendido como no tener derecho a otra pensión del propio SOVI, ni, conforme a lo que ya hemos indicado, a otra pensión de los regímenes que integran —o llamados a integrar— el sistema de Seguridad Social (DT. 2.2 LGSS0. Poco se puede añadir respecto a lo ya dicho en el epígrafe 2.2.4, salvo añadir que la percepción de la pensión de viudedad en el SOVI se suspende en los casos ya señalados del art. 9 del Decreto Let 2-9-55.

3.3.6. Haber contraído matrimonio con el causante por lo menos con 10 años de antelación a la fecha del fallecimiento del causante

Este requisito, al igual que en el actual Sistema de Seguridad Social, puede entenderse cumplido con la unión conyugal de hecho, conforme a la

Disposición Adicional 10.2 de la Ley 30/81 de 7 de julio (Ley del Divorcio), cuando existía un matrimonio previo con otra persona en la etapa anterior a su entrada en vigor, en la que no era posible el divorcio. La unión conyugal de hecho cuando no existe impedimento legal para el matrimonio, a pesar de la Recomendación n 67 de la O.I.T. de 1974, y al igual que ocurre el Régimen General, no supone el cumplimiento de este requisito. Tampoco considero cumplido este requisito, cuando tal unión data de antes de la Ley 12-3-38 y aunque existiera un matrimonio civil previo con otra persona pues su "nulidad era posible a tenor de la Ley 12-3-38" (S. TCT de 14-3-89 n 475).

Respecto a la duración del matrimonio exigida, surge una diferenciación —no existente en el actual Sistema— según el tiempo de matrimonio transcurrido —más o menos 10 años— de nuevo surge la cuestión de si este dato de diferenciación es relevante a los efectos de la consecuencia jurídica de tener o no derecho a la consiguiente prestación. En este aspecto puede observarse en la jurisprudencia, una línea flexible representada por las Sentencias del TCT de 7-5-84 Colex n 809, 29-9-84 Colex n 1377, en el sentido que venimos reclamando, así en la primera citada contemplan un caso de que el matrimonio no alcanza la duración de 10 años, no obstante existe una prolongada convivencia de más de 30 años y en ella puede leerse "la circunstancia de que el matrimonio de ambos no alcanzase la extensión temporal exigida, no puede ser causa suficiente... para privar a la viuda de dicha pensión, en razón, de una parte, a la finalidad y primordial espíritu que informa el establecimiento de la mencionada prestación, cual es el auxilio económico establecido en favor de la mujer que, habiendo convivido con el causante y careciendo de otra pensión de vejez e invalidez, pudiera quedar en situación precaria, teniendo su fundamento dicho beneficio en las relaciones afectivas y de auxilio mutuo inherente a la situación de convivencia, y, de otra parte, a la radical modificación introducida a esta materia tras la promulgación del texto constitucional...".

Junto con ella, otra línea jurisprudencial es más rigurosa —por ejemplo expuesta en la S. del TCT 3-7-86 Colex n1176 y 13-3-82 Colex n 554—. En ambos casos el matrimonio no llegó a ser celebrado con 10 años, "no existiendo las especiales circunstancias de larga convivencia extramatrimonial o de equidad (por muerte dentro del décimo año y próxima a su cumplimiento)" que se contemplarán "en las sentencias antes citadas", para estas carece "de relevancia la inexistencia de plazo matrimonial en el nuevo Sistema de Seguridad Social, lo que es inaplicable en los supuestos del SOVI que ... tiene su propia normativa" (S. 3-7-86 Colex n 1176). Aunque este argumento parece poderoso, no puede negarse que la diferenciación que se produce dentro del mismo SOVI, esta vez por razón del tiempo que duró la convivencia. Factor éste que entiendo irrelevante frente a la dependencia económica respecto al trabajador o pensionista que determinan una situación de necesidad, en este caso, de precariedad, teniendo en cuenta que a la situación de

viudedad se añade un plus para obtener el derecho, la edad superior a 65 años o la invalidez absoluta.

3.3.7. *Convivencia matrimonial o separación sin culpa del beneficiario*

Por último, exige el art. 3 del Decreto Ley 2-9-55 "d) que hasta la fecha de fallecimiento del esposo hubiera convivido el matrimonio y, en caso de separación, sólo se concederá la prestación cuando no se hubiera producido por culpa de la mujer". Ambos requisitos se encuentran prácticamente abandonados, el segundo, "separación sin culpa", por estar expresamente derogado por la D.A. 10.3 de la Ley 30/81 de 7 de julio reguladora del divorcio, que establece el derecho a la conservación de la pensión de viudedad "con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio" y el primero, "la convivencia", además por la presunción establecida en el art. 69 del Código Civil (S. TCT 15-1-87 Colex n 56, 24-4-86 RA 2877), aunque muchas Sentencias aún siguen analizando la cuestión de si la ruptura de la convivencia es imputable o no a la viuda (S. TCT 7-5-83 Colex n 766, 19-4-86 Colex n 637, 15-6-86 Colex n 1689 y otras muchas).

3.3.8. *El plazo de prescripción*

Aunque el art. 5 del Decreto 2-9-55 establece que "prescribirá el derecho de reclamación de las prestaciones de viudedad a los 5 años del fallecimiento del causante", el TCT en esta ocasión ha adoptado una línea de flexibilidad, por una parte, aplicando el art. 1969 del Código Civil en cuanto a la iniciación del plazo de prescripción, según el cual no se inicia hasta el día en que aquella pueda ser ejercitada, de especial incidencia para el caso de que el posible beneficiario no alcanzara los 65 años, pues sólo al llegar a esa edad consolida su derecho hasta entonces en expectativa; y, por otra parte, extendiendo la imprescriptibilidad proclamada por el art. 16.2 de la L.F.P. respecto a la prestaciones por muerte y supervivencia a la pensión de viudedad del SOVI cuando el fallecimiento se produce con posterioridad a esa Ley (S. TCT 20-2-87 Colex n 505, 2-1-86 Colex n 47, 24-2-87 Colex n 504).

Por el contrario, si el fallecimiento se produjo con anterioridad a la misma (21-6-72) pero con posterioridad a la Ley de S.S. de 21-4-66 el plazo de prescripción es de tres años, conforme a su art. 54, aunque cuando el fallecimiento ocurrió antes, el plazo de prescripción sería de 5 años, según el art. 5 del Decreto 2-9-55. En tales casos, tales pensiones no alcanzarían el beneficio de la imprescriptibilidad (S. TCT 20-2-87 Colex n 505 y 19-3-89 Colex n 475 entre otras), salvo, claro, que el requisito de la edad de 65 años se alcanzara con posterioridad a las normas citadas o que cuando entraran en

vigor las correspondientes normas (la L. de S.S. o la L.F.P.) el plazo de prescripción aún no se hubiera consumido (S. TCT 24-2-87 Colex 504, 22-1-85 Colex 247 entre otras).

En cuanto a los efectos retroactivos de la solicitud, el citado art. 5 de DL 2-9-55 los establecía en un año, sin embargo, si el fallecimiento se produce con posterioridad a la LFP la retroactividad se reduce a tres meses, en virtud de su art. 16.1, pues doctrina reiterada del TCT que "todo lo concerniente al reconocimiento y concesión de la prestación de viudedad debe someterse a las normas vigentes en la fecha del hecho causante, considerándose como tal la del fallecimiento del causante" (S. TCT 4-12-85 Colex n 1937).

4. EL SOVI Y EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO PARA TRABAJADORES MAYORES DE 45 AÑOS

Sabido es que el SOVI no contemplaba ningún tipo de prestaciones ni subsidios por desempleo. Esta cuestión se trae aquí a colación en relación con el subsidio de desempleo establecido por la Ley 31/1984 de 2 de agosto para los trabajadores mayores de 55 años cuando obtengan todos los requisitos, excepto la edad, "para acceder a cualquier tipo de jubilación".

En efecto, la Ley 31/84 de 2 de agosto, establecía un subsidio por desempleo a "los trabajadores mayores de 55 años, aún cuando se encuentren en algunos de los supuestos contemplados en el número anterior, siempre que acrediten que en el momento de la solicitud cumplen todos los requisitos salvo la edad para acceder a cualquier tipo de jubilación" (art. 13.2).

Aunque, por otra parte, el art. 7.3 del Real Decreto 625/85 de 2 de abril, Reglamento de desempleo, establece que "el trabajador mayor de 55 años tendrá derecho a percibir el subsidio... siempre que acredite reunir todos los requisitos, salvo la edad, para jubilarse como trabajador por cuenta ajena en cualquiera de los Regímenes de Seguridad Social en los que se reconozca el derecho a la prestación o subsidio por desempleo". Obviamente, y por partida doble, este segundo precepto supone la exclusión de los que tuvieran expectativas de jubilarse conforma a las normas del SOVI, pues ni éste forma parte de los Regímenes de Seguridad Social, ni reconocía el derecho a las prestaciones por desempleo. Así lo entendió el TCT (S. 18-1-86 RA 11817, 27-11-87 RA 26530, 27-10-87 RA 23247 etc...) argumentando que "al no ser propia de este antiguo régimen obligatorio la cobertura de desempleo... la aparente elasticidad del giro cualquier tipo de jubilación... no permite un entendimiento fundado sólo en el sentido literal de las palabras (art. 3 C.Civil)..." (S. TCT 27-10-87 RA 23247).

Doctrina que, afortunadamente, fue corregida por el TCT (p.e. en S. de 17-6-89 RA 4750, 8-7-88 RA 5269 y 21-12-89 Colex n 189) tras que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el tema, en relación con un

trabajador que mayor de 45 años habiendo agotado las prestaciones por desempleo podía haber accedido a la jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos, en Sentencia 209/87 de 22 de diciembre.

En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional analiza la cuestión desde el punto de vista de la legalidad de la norma reglamentaria en relación con el principio de igualdad. Para el T. Constitucional "la exigencia de que los trabajadores por cuenta ajena que aspiran al subsidio de desempleo para mayores de 55 años hayan de tener derecho a la jubilación precisamente en un régimen que prevea la protección por desempleo es una condición nueva, que en modo alguno pueda deducirse de aquel precepto de la Ley" (FJ. 4) y puesto que por vía reglamentaria no se pueden "crear derechos ni imponer obligaciones que no tengan su origen en la Ley de modo inmediato o, al menos, de manera mediata, a través de habilitación", tampoco puede el Reglamento "excluir del goce de un derecho a aquellos a quienes la Ley no excluye".

Por ello, concluye el T.Co., que, en tal caso, la exclusión del subsidio de desempleo ha de considerarse ilícita por discriminatoria, pues "la Ley 31/84 ha de ser interpretada a la luz de lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución... y si bien el compromiso que así pesa sobre los poderes públicos no siempre es susceptible de una actualización inmediata y generalizada, también lo es que si la propia Ley asume tal tarea... sus preceptos no podrán ser aplicados ni en términos generales, ni en los casos concretos, en menoscabo de tal empeño del legislador, que estableció así en sus normas unas previsiones abstractas y en tal caso igualitarias, sobre los beneficiarios, previsiones irreductibles por el Reglamento".

En definitiva, en aras del principio de igualdad, el T.Co. hace prevalecer una interpretación en el sentido más favorable a los derechos fundamentales, atendiendo a la finalidad de la norma de proteger de un estado de necesidad a un colectivo previsiblemente "incolable", en orden al carácter asistencial de la prestación y a su financiación por parte del Estado.

5. A MODO DE CONCLUSION

Casi 25 años después de que la LGSS proclamara la "extinción" del SOVI, como anecdóticamente señala MARTIN CORREA (27), este sigue dando lugar a una abundante litigiosidad, con un saldo, en lo que se refiere a la jurisprudencia del TCT, negativo a la efectividad de las pensiones que estableció aquel régimen, con unos criterios, a mi entender, excesivamente rígidos y restrictivos, que no tienen en cuenta el carácter eminentemente asistencial de aquel régimen, el mandato de la Constitución de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los

grupos en que se integran sean reales y efectivos... (art. 9.2), de garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas (art. 50), de proteger a los minusválidos, de garantizar prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41)... Lo que en varias ocasiones ha merecido la censura del T.Co.. De esta forma, el SOVI, que nació con claras insuficiencias ya en aquella época, desde luego con el concurso del legislador de entonces, pero también con el de los sucesivos que pudieron tomar medidas para garantizar su evolución, ha sido condenado a la petrificación, ha sido marginado de la evolución y del progreso social y con él miles de ciudadanos que les tocó trabajar en tiempos difíciles y, a pesar de ello, envejecer o enfermar en tiempos no mucho más fáciles a lo que ello respecta.

Afortunadamente la Ley de Pensiones no contributivas puede suponer un cierto alivio para los que no alcanzaron derecho a pensión porque no llegaron a las 1.800 cotizaciones, porque no se les computaron las pagas extraordinarias, porque el empresario olvido cotizar algunos días o porque enviudaron unos días antes de cumplir los 50 años o varios antes del 2-9-55, etc, etc. Si la cuantía de las pensiones que se establezcan en tal proyecto de Ley son dignas, dado que las del SOVI nunca alcanzaron este grado de dignidad, que suponga la "suficiencia económica" que predica la Constitución, posiblemente este alcance su definitiva extinción por vía de absorción de aquellas otras.

NOTAS

- (1) En adelante utilizaremos la abreviatura SOVI. Igualmente utilizamos las siguientes abreviaturas: LGSS -Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por el Decreto 2065/74 de 30 de mayo-; LSS -Ley de Seguridad Social, Decreto 21-4-66-; LFP -Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Seguridad Social, Ley 24/1.972 de 21 de Junio-; SOE -Seguro Obligatorio de Enfermedad-; DT -Disposición Transitoria-; REA -Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social-; CE -Constitución Española de 1.978-; TCT -Tribunal Central de Trabajo-; TS -Tribunal Supremo-; T.Co -Tribunal Constitucional-; TSJ -Tribunal Superior de Justicia-; S. -Sentencia-; ART. -Artículo-; AL -Actualidad Laboral-; RA -Repertorio Aranzadi-; PAG. -Página-.
- (2) Seguimos como método el análisis de la jurisprudencia del TCT fundamentalmente de los años 1980-1990.
- (3) En el mismo sentido S. del TCT de 26-2-87 RA 4343, 18-12-87 RA 28643, 1-10-87 RA 20485, etc.
- (4) ALVAREZ DE LA ROSA, J.M. en *Invalidez Permanente y Seguridad Social*. CIVITAS, S.A. Madrid 1982, pág. 120.
- (5) Por ejemplo S. del TCT 23-5-83 Colex n 763, 22-2-86 Colex n 42, 7-1-87 Colex n 55, 4-10-88 Colex n 1504....
- (6) MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL y SANTIAGO GONZALEZ ORTAGA en *Compendio de Seguridad Social*, TECNOS S.A. Madrid 1989, 3 Edición, pág. 40 y 125.
- (7) En el mismo sentido S. del TCT 26-11-82 Colex n 1890, 8-7-83 Colex n 1060, 18-6-84 Colex n 1091, 24-2-87 Colex n 501, 3-6-86 Colex n 1175 y 12-1-88 Colex n 187 entre otras muchas.
- (8) M.R. ALARCON CARACUEL y S. GONZALEZ ORTEGA en *Compendio de Seguridad Social*, citado, pág. 126.
- (9) En el mismo sentido las de 7-10-86 RA 9081, 12-7-88 RA 5130 y otras.
- (10) El mismo criterio sigue las Sentencias del TCT 7-10-86 RA 9086, 3-4-88 RA 3994 y TSJ de Galicia de 26-4-90, AL marginal n 706/90.
- (11) También las Sentencias del TCT 22-2-86 Colex n 421, 4-8-88 Colex n 504 y otras.
- (12) En el mismo sentido S. del TCT 1-6-82 Colex n 1095, 30-1-86 Colex n 214 y otras.
- (13) Así lo entiende también MANUEL ALONSO OLEA en *Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social*. Tomo 1, Madrid 1984 CIVITAS, pág. 65. Aunque lo hace criticando la Sentencia 19/82, para este autor estamos ante "un tratamiento diferentes de hechos anteriores o posteriores a una fecha, la de entrada en vigor de la Ley 41/70" y es razonable el tratamiento desigual impuesto por las normas de Derecho Transitorio "atendiendo a las normas vigentes al tiempo del hecho causante".
- (14) S. del T.Co. 253/88 de 20 de diciembre, 144/89 de 22 de Septiembre y 209/87 de 22 de diciembre y otras.
- (15) MIGUEL RODRIGUEZ PIÑERO y MARIA FERNANDA FERNANDEZ LOPEZ en *Igualdad y Discriminación*. TECNOS, Madrid 1986, pág. 63.
- (16) ALVAREZ DE LA ROSA J.M. en *Invalidez Permanente y Seguridad Social*, ya citado, pág. 122.
- (17) JOSE A. GOMEZ GIL en Pensiones SOVI y Gran Invalidez : Reflexiones sobre la S. del TCT 21-9-1983 según la Constitución y la Ley 13/1982 de 7 de abril. *Actualidad Laboral* n 11/1987, pág. 563.
- (18) J.M. ALVAREZ DE LA ROSA en *Invalidez Permanente y Seguridad Social*, citado, pág. 125.
- (19) En el mismo sentido S. del TCT de 15-2-82 Colex n 1891, hasta 3 sentencias de 2-3-87 RA 4647 a 4649 y otras.
- (20) M.R. ALARCON CARACUEL y S. GONZALEZ ORTEGA en *compendio de Seguridad Social*, citado, pág. 220.
- (21) Idem pág. 226.
- (22) También S. TCT de 21-5-83 Colex n 4 y 31-3-87 Colex n 712.

- (23) JOSE M. MARTIN CORREA, en El Residual y Extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, en *Actualidad Laboral* n 20/1.990, pág. 253.
- (24) Idem pág. 252. En el mismo sentido, S. 21-5-83 Colex n 765 y 20-2-87 Colex n 505 entra otras.
- (25) También S. TCT de 16-12-85 Colex n 1936, 10-1-86 RA 11276 , 3-5-88 RA 3983 entre otras.
- (26) En el mismo sentido S. del TCT 20-4-85 Colex n 977 y 13-6-86 Colex n 1041 entre otras.
- (27) J. M. MARTIN CORREA, en El residual y extinguido SOVI, citado, pág. 249.